Justicia en línea. La regulación jurídica de las comunicaciones electrónicas y su aplicación en el ámbito judicial.

Maldonado Sánchez, Adán
México, Tirant lo Blanch, 2014, 455 pp.

A finales de la década de los años noventa, hubo quien se atrevió a hablar de “la necesidad de una justicia tecnológicamente avanzada”¹. En aquél entonces, tal vez aún resultaba impensable. Hoy en día, más que una realidad se está convirtiendo en una necesidad.

Actualmente, los poderes públicos están incorporando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC's) a su quehacer diario. La administración de justicia no es ajena a este proceso, su modernización es una pieza para el éxito de la nueva oficina judicial. Esto es, la oportunidad que ofrecen las TIC's van encaminadas a mejorar la impartición y administración en su doble vertiente: la interna que va desde la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; y, la externa, que consiste en mejorar los servicios prestados a los usuarios.

Lo anterior, ha hecho que la justicia se encuentre inmersa en un período de cambios y transformaciones, lo que también implica nuevos retos, los que deben ser entendidos no como amenazas sino como una oportunidad de transformación y mejora. Ello, a través de la informática y el Derecho, ha permitido crear nuevos modelos de gestión, procuración e impartición de justicia basados principalmente, en el ahorro de costos y tiempos en el quehacer jurisdiccional.

Desde un punto de vista técnico, cabe decir que la justicia del futuro será el de una justicia basada en el expediente judicial

¹ Vid. Castells, Manuel, *La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La sociedad red*, vol. 1, Alianza editorial, Madrid, 2008.

electrónico o digital². Es decir, será el de una justicia sin papeles, más accesible e inter-operable, esto es, una *justicia en red*. O bien, como se señala en el título de la obra que se reseña, es y será el de una *justicia en línea*.

Precisamente Adán Maldonado Sánchez, en su libro titulado *Justicia en línea. La regulación jurídica de las comunicaciones electrónicas y su aplicación en el ámbito judicial*, realiza un estudio de la interrelación que existe entre las tecnologías de información y la comunicación y el Derecho (*Derecho informático*), enfocada a su aplicación en el ámbito judicial.

La obra de Maldonado Sánchez se encuentra dividida en cuatro capítulos. En el primero, titulado “El derecho y las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación”, se esboza el planteamiento de la *justicia en línea*, así llamada por los países latinoamericanos y como *e-justicia* por países europeos. Se señalan además del impacto que han tenido las TIC’s en el ámbito jurídico.

En el capítulo segundo: “Internet, Derecho Informático, e informática jurídica”, se hace un estudio de la historia y la arquitectura de Internet como máxima expresión de la *sociedad de la información*. De igual manera, se aborda la interrelación entre el Derecho y las TIC’s, cuyo binomio ha generado el nacimiento y desarrollo del denominado *Derecho Informático*, el cual ha sido definido como la “rama del Derecho que estudia las normas y principios internacionales sobre el tratamiento automático de la información con trascendencia en el campo jurídico”.

La finalidad primaria y esencial por regular este nuevo Derecho puede incidirse en dos ámbitos: a) en el ámbito constitucional, para salvaguardar o prevenir la tutela de los derechos fundamentales (autodeterminación informativa, privacidad, intimidad, protección de datos personales); y, b) *en el ámbito legal u ordinario de las personas* (contratos realizados por medios electrónicos, delitos informáticos, nombres de dominio, etc.).

En el mismo capítulo se estudia la informática jurídica y sus aplicaciones en el ámbito de las funciones estatales. Esta, señala el autor, se encuentra dividida en: 1) informática jurídica documental; 2)

² Un estudio interesante sobre el tema puede verse en Mira Ros, Corazón, *El expediente judicial electrónico*, Dykinson, Madrid, 2010.

informática jurídica de control y gestión; y 3) los sistemas expertos legales o decisional.

En el capítulo tercero, denominado “La informatización del proceso judicial” se sostiene la tesis de que los gobiernos y sus sistemas de administración de justicia, no deben quedar al margen de la revolución tecnológica, por lo que deben migrar a las nuevas formas de gestión y organización, teniendo como referente un modelo basado en las capacidades de aprendizaje, el trabajo en red y la innovación continua.

Asimismo, se abordan los desarrollos tecnológicos que han implementado los poderes judiciales de los Estados³, el Poder Judicial de la Federación y lo que han realizado en la materia los países latinoamericanos y España (este último con avances importantes en la *e-justicia*, gracias al activismo y coordinación del Ministerio de Justicia, el Consejo General de Justicia del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas). Destaca en este capítulo la Ley del Proceso Electrónico de Brasil, cuyo artículo primero, autoriza “el uso de los medios electrónicos en la transmisión de procesos judiciales, comunicación de actos y transmisión de piezas procesales en los términos de dicha Ley”.

En el último capítulo, llamado “El documento electrónico, firma electrónica y firma digital, certificado digital y entidades de certificación en México”, se analiza la historia del documento impreso hasta llegar a su soporte electrónico (documento digital) con los mismos alcances informativos y jurídicos a los que se conoce como el principio de *equivalencia funcional*.

En definitiva, el texto de Maldonado Sánchez deja en claro que la incorporación de las TIC's a la justicia es una realidad. Es decir, la tecnología se está convirtiendo en el mejor aliado de la administración de justicia en México. Al igual que Internet, se ha convertido en una

³ De manera particular, se estudia su implementación en los órganos judiciales en los Estado de Querétaro, Sinaloa, Tabasco, San Luis Potosí, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Baja California Sur Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

herramienta poderosa a través del cual se puede comunicar y transparenta la actividad jurisdiccional⁴.

A pesar de lo anterior, existen ciertos retos a los que se enfrenta la justicia en línea, que deben ser resueltos si se quiere que el uso y la implementación de las TIC's a la justicia sea un éxito. Cabe destacar los más relevantes: la discusión relativa a la protección de los datos personales y la transparencia judicial, así como la necesidad de fomentar una cultura entre los operadores judiciales, a fin de que hagan un uso adecuado y responsable de las TIC's en la impartición y administración de justicia.

Aristeo García González*

⁴ Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México*, México, 2006, p. 334.

* Auxiliar en la Coordinación de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid, España. aristeo_gar@hotmail.com